



Juventud y ruralidad: políticas públicas para sembrar futuro

Javier Fuchslocher Baeza
Delegado presidencial
provincial de Biobío



El Día de las Campesinas y los Campesinos, conmemorado hace algunos días, es más que una fecha simbólica: es una invitación a mirar hacia el Chile profundo, a ese mundo rural que sostiene la vida de nuestras ciudades, pero que por décadas ha debido enfrentar el olvido y la falta de oportunidades. Esta fecha nos recuerda que el país no se construye solo desde las capitales; también se levanta desde las manos de quienes siembran, cosechan y cuidan la tierra, muchas veces en condiciones adversas, pero siempre con la esperanza de un futuro mejor.

En este contexto, la firma de la Política Nacional de Juventudes Rurales marca un hito que merece ser destacado. Durante años, una de las mayores heridas del campo chileno ha sido la migración forzada de jóvenes hacia las ciudades, en busca de estudio, empleo o simplemente oportunidades de vida que sus comunas no ofrecían. Esa diáspora ha dejado atrás campos envejecidos y comunidades con dificultades para proyectarse en el tiempo. El último Censo confirma esta realidad: comunas como Quilaco, Quilleco y Antuco presentan una alta tasa de envejecimiento en su población, reflejando la urgencia de generar condiciones que retengan y atraigan a las nuevas generaciones.

Los instrumentos de esta política apuntan precisamente a abrir oportunidades para quienes quieren desarrollarse sin abandonar el campo. Iniciativas del Ministerio de Agricultura como "Mi Primer Negocio Rural" fomentan el emprendimiento de jóvenes que buscan innovar en la agricultura familiar, mientras programas como "Tierras Vivas" facilitan el acceso a predios fiscales para proyectos productivos, con un foco especial en mujeres y juventudes rurales. Pronto se sumará "Tierra Joven", que permitirá a nuevos agricultores avanzar en la compra de terrenos y consolidar sus proyectos de vida en sus propias comunas.

Este impulso se complementa con medidas sociales que fortalecen la vida comunitaria. La instalación de Centros Comunitarios de Cuidados en sectores rurales como el de San Rosendo no solo apoya a las familias, sino que libera tiempo y energía para que mujeres y hombres puedan desarrollar actividades productivas sin sobrecarga doméstica.

En nuestra provincia de Biobío, donde comunas como Alto Biobío, Quilaco, Yumbel o Negrete tienen en la agricultura familiar campesina su principal motor, estas políticas pueden marcar un antes y un después. No se trata de asistencialismo, sino de justicia territorial: de reconocer que la vida rural requiere servicios, infraestructura y acceso a oportunidades para florecer.

El aumento del 21% en el presupuesto de INDAP y la entrega en la provincia de 389 bonos de riego entre 2021 y lo que va del año son señales concretas de que el Estado busca fortalecer a los pequeños agricultores. A esto se suma la modificación de la ley de riego para reaccionar más rápido ante emergencias, un punto clave frente a los desafíos del cambio climático. Porque hablar de seguridad hoy no es solo hablar de orden público; también es garantizar soberanía alimentaria, acceso al agua y resiliencia productiva.

Desde el Biobío, donde el campo no es una postal, sino una realidad cotidiana, vemos en esta agenda un horizonte fértil. Qué buena hora que las políticas públicas no solo lleguen, sino que permanezcan en el tiempo, se evalúen y mejoren en conjunto con las comunidades rurales. Porque cuando sembramos oportunidades, cosechamos dignidad.